

Sucesión Presidencial

El tema de la sucesión presidencial cada día despierta mayor número de opiniones en todos los sectores, lo que se irá acentuando a medida que los términos fijados por la propia Constitución vayan agotándose.

Desde los sectores oficialistas se escuchan voces que anuncian la existencia de grupos, organizaciones y particulares que presionan para que el Presidente Pinochet sea nominado candidato a un nuevo período presidencial.

De acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros les corresponde presentar a la consideración del país el nombre de la persona que ellos estimen con las características y condiciones para asumir la Presidencia de la República en los tiempos que se avecinan.

Nadie podría sostener que las personas que representan tan elevadas jerarquías, constituidos de una sólida estructura moral, pudieran ser inducidos por factores externos en la delicada tarea prevista por los mecanismos de la Constitución.

Lo que la ciudadanía espera de ellos es que, teniendo en consideración la realidad del país y la tarea que debe cumplirse en la búsqueda del bien común, la persona que rija los destinos de Chile cuente con un respaldo mayoritario, libremente expresado y cuyo ideario represente un sentir nacional.

El próximo período presi-

dencial reunirá una serie de características legales y políticas que deberían hacerlo diferente al lapso vivido por el país. La Constitución supone la vigencia de un Parlamento y que la institucionalidad diseñada entre en función plena. Quien ocupe La Moneda deberá, entonces, emplear sus condiciones dentro de ese nuevo esquema.

Para la oposición, el Presidente Pinochet se encuentra en campaña. Lo afirman así diciendo teniendo en vista declaraciones de funcionarios, de personeros uniformados y de quienes se presentan como partidarios políticos del Primer Mandatario. Las voces opositoras aseguran que la supuesta campaña se estaría realizando con instrumentación del andamiaje de la administración pública, especialmente los municipios. Argumentan, además, que las Fuerzas Armadas no deberían emitir juicios que impliquen actuar definitivamente en política.

Nadie puede negar, sin embargo, que es legítimo que el gobierno de las Fuerzas Armadas desee ver prolongada su obra más allá de los tiempos contingentes. Y, por supuesto, el camino prefijado para ello pasa por un plebiscito en el que deben aspirar a que triunfe su aspiración.

Lo que los opositores se resisten a incluir en un análisis más profundo de las diversas variables existentes es que el candidato designado pueda proyectarse más allá de los nombres conocidos.